

**MAESTRÍA EN CIENCIAS POLITICAS CON ENFASIS EN PAZ E
INTEGRACION**

BOGOTÁ D.C.

AÑO DE ELABORACIÓN: 2015

**TÍTULO: RESISTENCIA Y REPARACIÓN COMO PRÁCTICAS POLÍTICAS:
EL CASO DE LAS MADRES DE SOACHA FRENTE A LA DESAPARICIÓN
FORZADA POR LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES DEL 2008 EN
COLOMBIA**

AUTOR (ES): FONSECA RODRIGUEZ, Natalia del Pilar

DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): MARTIN FIORINO, Victor

MODALIDAD:

PÁGINAS: **TABLAS:** **CUADROS:** **FIGURAS:** **ANEXOS:**

CONTENIDO:

INDICE

RESUMEN

- 1. EL ESTUDIO DE LAS PRÁCTICAS POLÍTICAS DE LAS MADRES DE SOACHA**
- 2. ANTECEDENTES Y CONTEXTO**
- 3. CONSTRUCCION TEORICA**
- 4. LA RESISTENCIA Y LA DEMANDA DE REPARACIÓN COMO PRÁCTICAS
POLÍTICAS DE LAS MADRES DE SOACHA**

5. CONCLUSIONES

6. BIBLIOGRAFIA

7. ANEXOS

PALABRAS CLAVES: RESISTENCIA, REPARACIÓN, CONFLICTO ARMADO, DESAPARICIÓN FORZADA, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, MADRES DE EJECUTADOS.

DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de investigación, tiene un propósito y es Presentar las prácticas políticas que se generan, a partir de la resistencia y la demanda de reparación, realizadas por las madres de Soacha, frente a la desaparición forzada debida a las ejecuciones extrajudiciales del 2008 en Colombia. En el trabajo, a partir de la descripción del contexto del conflicto armado colombiano y las políticas de gobierno, expone los hechos y circunstancias relacionados con estas ejecuciones extrajudiciales.

El trabajo presenta las prácticas políticas de las madres de Soacha a partir de su resistencia y la demanda de reparación, compila argumentos acerca de la comunidad de madres, los medios de comunicación, lo jurídico, las organizaciones no gubernamentales y el asunto internacional. Finalmente enuncia la significación de la experiencia para las madres, la cultura respecto a los derechos humanos y la responsabilidad del estado ante los procesos legales de las demandas.

METODOLOGÍA: El trabajo se realiza mediante una metodología fundamentada en un análisis cualitativo de una compilación de información secundaria escrita con un enfoque crítico social.

CONCLUSIONES: Las Madres con su resistencia y demanda de reparación han despertado la sensibilidad de su dolor y esto ha facilitado la comunicación y socialización de sus experiencias en escenarios nacionales e internacionales con implicaciones políticas. Con la desaparición, hallazgo de los cuerpos de sus hijos y los procesos legales y políticos que han emprendido, los sentimientos de las madres han cambiado la significación que tenían sobre el Estado.

Los procesos de duelo y las re significaciones de las familias víctimas, han posibilitado su resistencia y demandas de reparación. Con el caso de las madres de Soacha se ha establecido un impacto del conflicto armado, las decisiones políticas y la degradación del sentido humano en Colombia que promueve políticamente la comprensión de la magnitud de su tragedia y dolor.

La impunidad ha acompañado el daño generado con los asesinatos de los hijos de las madres de Soacha, no han recibido oportuna protección ante las amenazas que han recibido, apoyo y continuidad de atención, han existido dilaciones judiciales que benefician a los victimarios y los esfuerzos por dejar los casos en manos de la justicia militar. Ante esta situación, las madres han mantenido su resistencia y lucha por el reconocimiento y la reparación mediante sus acciones jurídicas y políticas ejerciendo sus derechos en escenarios nacionales e internacionales.

Los testimonios y registros dan cuenta de la continuidad de las lesiones ejecutadas a la humanidad, estos se han establecido como evidencia de las dinámicas políticas y militares del conflicto armado en cabeza del Estado siendo parte de una memoria histórica que dignifico y transformó a las madres y ojala en el futuro a Colombia.

Se encontró abundante información acerca de la re significación de los relatos alternativos de los sentimientos de las madres y sus familias que han sido

comunicados a la sociedad buscando legitimación, solidaridad y apoyo para que no haya lugar a repetición, dando un salto de la lucha familiar, política y de derecho a la lucha social y colectiva de las madres.

Las redes de apoyo y solidaridad nacionales e internacionales con las madres han facilitado y brindado opción para recuperar el sentido de la vida de las madres y sus familias con la esperanza del reconocimiento y posterior reparación.

Se encuentran aspectos comunes de la resistencia, lucha y práctica política de las madres de Soacha (2008) con: las madres de la plaza de mayo en Argentina (1977), La asociación de Mama Angélica en el Perú (1983), Grupo de Apoyo Mutuo en Guatemala, GAM. (1984), La Fundación Madres de Srebrenica en Bosnia y Herzegovina (1996). Esto muestra que en los países con conflicto o acciones violentas, las madres trabajan y se organizan para rescatar la dignidad de su dolor y sus familiares desaparecidos(as) o asesinados(as), defendiendo con su práctica política los derechos humanos y la demanda de justicia. Se considera este aspecto muy importante y relevante para futuras investigaciones y se desarrolló el siguiente cuadro de relación de aspectos comunes entre las madres de Soacha en Colombia y las de la Plaza de Mayo en Argentina.

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –



| ASPECTO COMUN | MADRES PLAZA DE MAYO | MADRES DE SOACHA |
|--|---|--|
| PAIS – CIUDAD | ARGENTINA - BUENOS AIRES | COLOMBIA – BOGOTA DC - SOACHA |
| AÑO EN EL QUE SE PRESENTARON LOS HECHOS | 1976 - 1983 | 2008 - 2010 |
| MES Y AÑO EN QUE SE EMPEZARON A ORGANIZAR | ABRIL DE 1977 | SEPTIEMBRE DEL 2007 |
| LIDER ACTUAL | ESTELA DE CARLOTTO | LUZ MARINA BERNAL |
| CONTEXTO POLITICO Y SOCIAL QUE SE SUSCITO EN ESE MOMENTO | <p>INICIO DE LA DICTADURA MILITAR, QUE SE PROPICIA CON EL ASCENSO DEL GENERAL JORGE RAFAEL VIDELA AL PODER, CON EL DESARROLLO DE LO QUE SE CONOCIO COMO LA "JUNTA MILITAR".</p> <p>EVENTOS QUE SE DESENCADENARON:</p> <ul style="list-style-type: none"> SUSPENSION DE LA ACTIVIDAD, POLITICA, Y LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, DISOLUCION DEL CONGRESO, LOS PARTIDOS POLITICOS, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Y DESARROLLO DE TODA ACTIVIDAD POLÍTICA QUE ATENTE EN CONTRA DE LA JUNTA. PROMOCION DE LA CENSURA ADVENIMIENTO DE "LA GUERRA SUCIA" Y LA REPRESION ILEGAL. DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS NO ADSCRITAS AL REGIMEN, ESTABLECIMIENTO DE LA TORTURA. ADVENIMIENTO DE LA ESPECULACION Y "LA PLATA DULCE" EL DESARROLLO DEL "MUNDIAL DE FUTBOL DE 1978" EL CONFLICTO DEL CANAL DEL BEAGLE Y LA GUERRA DE LAS MALVINAS. | <p>PERIODO DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ELEGIDO POR VOTO POPULAR, ALVARO URIBE VELEZ, CONOCIDO COMO LAPOLITICA DE LA "SEGURIDAD DEMOCRATICA".</p> <p>EVENTOS QUE SE DESENCADENARON:</p> <ul style="list-style-type: none"> PROMOCION Y APOYO A LA "GUERRA CONTRA EL TERRORISMO", A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. GENERANDO PERSECUCION A LOS GRUPOS GUERRILLEROS AL MARGEN DE LA LEY, PROMOCION ENTONCES UNAS RELACIONES TENSAS CON VENEZUELA Y ECUADOR, SE MOSTRO COMO ALIADO DE LOS ESTADOS UNIDOS FORTALECIMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA, PERSECUCION IRRESTRICTA A LOS GRUPOS SUBVERSIVOS Y LAS TENDENCIAS IZQUIERDISTAS, Y OTRAS CORRIENTES IDEOLOGICAS; PROMOCION Y ÉXITO EN LA "OPERACIÓN JAQUE" (RESCATE DE INGRID BETANCUR, 3 CIUDADANOS NORTAMERICANOS Y 11 MILITARES), Y LA "OPERACIÓN FENIX" MUERTE DEL LIDER GUERRILLERO DE LAS FARC, RAUL REYES) ESTABLECIMIENTO DE UN REFERENDO CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2003, CUYO FIN ESCENCIAL FUE EL DE "ACABAR CON LA CORRUPCION". INCREMENTO DEL PIB, UN PLEGAMIENTO TOTAL HACIA LAS POLITICAS NEOLIBERALES. |
| EVENTO JURIDICO QUE SE SUSCITO | DESAPARICION FORZADA | EJECUCION EXTRAJUDICIAL |
| RESPUESTA JURIDICA QUE HAN TENIDO | <p>CREACION DE LA COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS (CONADEP) EN 1983, SU FIN ESCENCIAL FUE EL DE INVESTIGAR EL DESTINO CORRIDO POR LOS DESAPARECIDOS, LAS CIRCUNSTANCIAS DE SU DESAPARICIÓN, AL IGUAL QUE LA CONSTRUCCION DE UN INFORME DE RESULTADOS. EN EL AÑO DE 1984, DENOMINADO "NUNCA MÁS".</p> | <p>LA RESPUESTA POR PARTE DEL ESTADO COLOMBIANO, HA SIDO "TIMIDA" SOLO HAY UNA CONDENA, QUE HA SIDO APELADA, A UN CORONEL, A UN TENIENTE, A UN SARGENTO Y A SEIS SOLDADOS; INCLUSIVE SE ABSUELVEN DE ESTA RESPONSABILIDAD A LOS MILITARES IMPLICADOS EN ESTE HECHO. EL ESTADO HA ESTADO AUSENTE PORQUE SE HA BUSCADO OCULTAR ESTA REALIDAD.</p> |

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –



| | | |
|------------------------------|--|--|
| PROTAGONISTAS ESCENCIALES | LAS MADRES DE LOS DESAPARECIDOS, Y SUS FAMILIAS, AL IGUAL QUE, LA ADMINISTRACION POLITICA Y DE JUSTICIA, QUE SE ENCARGO DE LAS INVESTIGACIONES DE LO ACONTECIDO, CON EL ADVENIMIENTO, OTRA VEZ DE UN REGIMEN PRESIDENCIALISTA Y DEMOCRATICO; LA POBLACION CIVIL, QUE ATENDIO Y APOYO A LAS VICTIMAS DEL FLAGELO. LOS MILITARES, QUE EJECUTAROSN ORDENES Y LLEVARON A CABO LOS HECHOS ANTERIORMENTE COMENTADOS. | LAS MADRES DE LOS DESAPARECIDOS, Y SUS FAMILIAS, LAS "ONG" DE APOYO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, (NACIONALES E INTERNACIONALES), LA POBLACION CIVIL, QUE ATENDIO Y APOYO A LAS VICTIMAS DEL FLAGELO, LOS MILITARES QUE LLEVARON A CABO ESTAS EJECUTORIAS, LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y LA POLICIA NACIONAL, ATENDIENDO A UN APOYO "POBRE", DE ESTA SITUACION", LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES, COMO LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS, LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. |
|------------------------------|--|--|

Se evidencia la presencia de las madres en escenarios públicos nacionales e internacionales: en universidades, el Congreso de la República, las plazas, las tarimas, los noticieros, los teatros, las marchas y los juzgados. Allí han buscado dar a conocer lo que sucedió con sus hijos, generar conciencia, construir memoria, paz, debate, justicia, acompañar a otras víctimas y formarse como lideresas. Se iniciaron como mujeres modestas para llegar a actuar como sujetas de derechos en un espacio político del país.

La politización de su colectivo de madres las ha descubierto como sujetas de derechos con el encuentro de otras víctimas para continuar luchas conjuntas, así, se transformaron sus identidades enlazando lo personal familiar con lo político. Las situaciones de su dolor generaron un proceso de identidad colectiva para ejecutar acciones con procesos legales nacionales e internacionales y lograr reconocimiento y apoyo para la justicia. Lo colectivo de su dolor como madres las ha unido como víctimas del Estado.

Luego de transcurridos varios años de los mal llamados “*falsos Positivos*”, se puede decir que este tipo de circunstancias, estuvieron a la vanguardia, en varios destacamentos y regimientos del ejército colombiano, eso es lo que han arrojado las investigaciones, este carácter de incentivar el actuar de las tropas mediante la directiva ministerial 029 del 17 de noviembre de 2005, arrastró a varios de los integrantes del ejército a la promoción y consecución de la sevicia, el lucro económico y la avaricia. Los fallos no solamente atienden a la connotación del lucro económico, sino también al carácter y el dilema ético del portar el uniforme y ser el soldado de la patria, y porque no, señalar, el desdén

administrativo del Ejército al sentirse presionado por el Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República con esa necesidad abrumadora de mostrar cifras y resultados de bajas en combate, esto es una muestra de la mercado latría de la muerte, en la cual se vio subsumido el país, en la llamada “*política de la seguridad democrática*”.

En el año 2009, el ahora presidente Santos, en ese entonces Ministro de Defensa, refleja visiblemente la perspectiva de la institución, frente a los hechos que acontecieron. Según Santos, solo había comprensión de la circunstancia a partir de una denuncia formulada en octubre de 2009, asumiendo entonces que esta circunstancia fue una mera eventualidad a pesar de la previa existencia de una comisión especial que investigo sobre el tema y de un informe que fue presentado al Presidente de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, que da cuenta de las acciones y eventualidades generadas por los integrantes del Ejército, en donde se muestran evidenciadas las masacres y los asesinatos cometidos por algunos miembros de la fuerza pública.

Este caso de desaparición forzada, por parte de los “*falsos positivos en Soacha*” ha tenido una repercusión trascendente con el manejo político del país, a partir de la responsabilidad que se demanda, se evidenciaron las falencias del mismo en cuanto a la consecución, entendimiento y comprensión de los Derechos Humanos.

En cuanto al manejo político en el entorno estructural del Estado, este se presenta con cualidades al ser inequitativo, abusivo, desatento de la ley y la promoción y consecución de los derechos humanos. Resultó lamentable la

política del acomodo, del entreguismo y la sumisión que se hace de los débiles hacia los poderosos, de los afligidos hacia los infractores, es en esencia un aberrante caso de impunidad, en donde solamente pagan los autores materiales y los intelectuales quedan cubiertos bajo la sombra.

El actuar político de los líderes del Estado, y de quienes defienden las instituciones, queda en entredicho, al generarse entre los mismos, mecanismos de protección y de amparo de los causantes, aprovechándose de la inequidad de la ley, y claro, de los vacíos jurídicos. Lo anterior, promueve, una política del desacato, y el quiebre de la institucionalidad, estatal y jurídica, ya que no hay respeto por las instituciones, y mucho menos por las normas, no se genera una atención a la promoción y la consecución de los derechos y los deberes humanos.

Los “falsos positivos”, son un hecho, que reivindica un actuar violento de una sociedad, desequilibrada en lo económico, y político, de un muy pobre andar ético, en donde el carácter de lo material prima sobre el actuar de la voluntad en la consecución de Derechos humanos y claro en la promoción de un Estado, en donde la convivencia, juegue, en conjunto con la norma, un papel esencial, en el desarrollo del proyecto de vida de sus integrantes.

El valor de la dignidad, la verdad, y la justicia, han quedado en entredicho, ante la corrupción, la inequidad, y la no reparación, descuidando los valores de la Sociedad colombiana. Ante la comunidad internacional, Colombia se mostró como un Estado en donde el aparato judicial no brinda garantías, el aparato político es ineficiente y el proceder social de sus habitantes es confuso, además aparece incapaz de hallar las soluciones a sus problemas, puesto que tiene que acudir al

arbitraje internacional para lograr solucionar los problemas de inequidad e injusticia, del no respeto al ser humano.

Es inverosímil, que se hable ante la comunidad nacional e internacional, de un “falso positivo”, ya que en la gramática española no existe esta denominación. A cambio debería buscarse comprender, como es que se promueve la desaparición de una persona y esta se permite para la consecución de un lucro económico, social y político de unos pocos.

La violencia en el conflicto armado de Colombia se ha afianzado en la cultura del país mediante acciones como los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, esto se ha confrontado con las demandas legales y sociales para la aplicación de las normas constitucionales y jurídicas en estrecha relación con el campo de los derechos humanos y su reconocimiento para el desarrollo de nuevas y mejores políticas de gobierno.

Las reclamaciones sociales que han realizado las madres de Soacha son muy importantes para la futura toma de decisiones del Estado y Gobierno sobre sus políticas para; su funcionamiento, estructura, sus instituciones y funcionarios.

Las reclamaciones de las madres lograron la atención del Estado, el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Fiscalía General y la Procuraduría de la nación, la Personería y el Congreso.

El gobierno antes del 2008 propuso y estableció una estrategia mediante la directiva 029 del Ministerio de Defensa con la consecuencia de las ejecuciones

extrajudiciales, entonces, se generó una contradicción con las políticas gubernamentales basadas en los Derechos humanos, causando dificultades al interior y para el funcionamiento de las entidades públicas.

Las ejecuciones extrajudiciales son parte de las violaciones constantes a los Derechos humanos resultantes de la violencia política por el conflicto armado colombiano, las reclamaciones de las madres por ello se fundamentan en la dignidad humana con el respeto por los Derechos humanos, la vida y la libertad ratificada en la carta política y la legislación de Colombia.

La ineficiencia de las acciones del Estado para responder a las reclamaciones de las madres obedece a la ausencia de una cultura de respeto hacia los Derechos humanos, ante esta situación, el caso particular de las ejecuciones extrajudiciales de los hijos de las madres ha promovido la necesidad de acciones preventivas del Estado y generado una conciencia encaminada a unas nuevas políticas de gobierno.

El Estado finalmente, ante la resistencia y demandas de reparación de las madres de Soacha tendrá que enfrentar las demandas, procesos, condenas y sanciones dentro del marco legal y político nacional e internacional al que está sometido como parte de la consecuencia de las acciones emprendidas por sus líderes y funcionarios que dieron lugar a las ejecuciones extrajudiciales. De esta forma el Estado asumirá la responsabilidad por la violación de los Derechos humanos.

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –



En un futuro, ojala próximo, la sociedad colombiana ante el mundo vera y evaluara los resultados de la resistencia y demanda de reparación realizadas por las madres de Soacha.

FUENTES: AGAMBEM, Giorgio (2004) Estado de excepción. Homo Sacer II, 1. Editorial Pre-textos, Valencia.

ALCALDÍA mayor de Bogotá, (2015). Recuperado el 13 de mayo 2015 de: [http://alcaldia.iprc.org.co/lv_normas.shtml?apc=g1C1--&cmd\[1164\]=c-1-%27Libres%20de%20violencias%27-2-%273020%27](http://alcaldia.iprc.org.co/lv_normas.shtml?apc=g1C1--&cmd[1164]=c-1-%27Libres%20de%20violencias%27-2-%273020%27)

AMNISTÍA Internacional. (2005). El estado de Derechos Humanos en el mundo. Páginas 139-142. Madrid.

_____. (2010). Colombia en busca de justicia: las madres de Soacha. Madrid.

ARENAS NATALIA (2014) El Batallón que gano el concurso de los Falsos Positivos. Recuperado el 21 de junio 2015 de: <http://lasillavacia.com/historia/el-batallon-que-gano-el-concurso-de-falsos-positivos-49218>.

BUERGENTHAL, Thomas. (1995). La Comisión de la Verdad para El Salvador. IIDH. Estudios Especializados. El Salvador.

CABALLERO, Antonio. (2000). “¿Porque es necesaria una izquierda en Colombia?”. En: Revista Semana, No. 961, Octubre 2. Bogotá. Ed. Semana.

CENTRO Nacional de Memoria Histórica. CNMH, (2014). Desaparición forzada, Tomo I: Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia, Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá D.C. – Colombia

CENTRO Nacional de Memoria Histórica. CNMH, (2013). Desaparición forzada, Tomo II: Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010), Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá D.C. – Colombia

_____, (2014). Desaparición forzada, Tomo III: Entre la incertidumbre y el dolor, impactos psicosociales de la desaparición forzada, Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá D.C. – Colombia

_____, (2014). Las Madres de Soacha no sabemos dónde albergar tanto dolor: siete años después del crimen de nuestros hijos, a la ausencia se une la impunidad. Recuperado el 17 de mayo 2015: <http://centromemoria.gov.co/las-madres-de-soacha-sabemos-donde-albergar-tanto-dolor-siete-anos-despues-del-crimen-de-nuestros-hijos-la-ausencia-se-une-la-impunidad/>.

CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular. (2009). Informe especial abril 2009- Falsos Positivos: Balance del segundo semestre de 2008.

COLOMER, Álvaro, (2008). Guardianes de la memoria. Recorriendo las cicatrices de la vieja Europa, Ediciones Martínez Roca, Madrid,

COORDINACIÓN Colombia – Europa – Estados Unidos y Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario. (2008). Informe Final de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia. Bogotá, p. 10. Recuperado de: http://www.dhcolombia.info/IMG/Informe_misionobservacion_ejecuciones.pdf).

CUYA, Esteban (2011). La Justicia Transicional en América Latina: Desarrollo, aplicación y desafíos, NMRZ Categoría: Jurisdicción del Tribunal Criminal, Recuperado el 2 de Junio de 2015 de: <http://www.menschenrechte.org/lang/es/strafgerichtsbarkeit/justicia-transicional>

DEPARTAMENTO Nacional de Estadística (DANE), (2013). Tomado en Abril 1 de 2014 de http://www.dane.gov.co/reloj/reloj_animado.php

DEL VALLE ORELLANA, Nicolás (2012). Entre poder y resistencia, tras los rastros de la política en Foucault. Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública, vol. X, núm. 17, diciembre, 2012, pp. 147-168. Universidad Central de Chile. Santiago, Chile.

DIARIO EL TIEMPO (2015).” Estado niega 50 nuevos casos de falsos positivos en el país”. Recuperado el 14 de mayo 2015 de: <http://www.eltiempo.com/mundo/ee-uu-y-canada/falsos-positivos-ong-denuncian-ante-cidh-mas-de-50-casos/15429117>

_____. (2015) “General (r) Montoya, llamado a declarar por ‘falsos positivos’”, Recuperado el 24 de mayo 2015. De: <http://www.eltiempo.com/politica/justicia/fiscalia-llama-a-rendir-declaracion-a-cuatro-generales-por-falsos-positivos/15992658>

DIRECTIVA ministerial 029 de 2005. (2005). El Espectador, 1 de noviembre de _____ 2008. Recuperado _____ de <http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo87344-directiva-ministerial-029-de-2005>

FALLO - REPÚBLICA DE COLOMBIA. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA SALA PENAL MAGISTRADO PONENTE AUGUSTO ENRIQUE BRUNAL OLARTE RADICACIÓN: 54498-60-01-135-2008-80006-05 PROCEDENTE Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca (2013)

FOUCAULT, M. (1970). La Arqueología del saber. México: Ed. Siglo XXI.

_____. (1985). Las palabras y las cosas. México: Ed. Siglo XXI.

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO (FEDES). Soacha la punta del iceberg. FALSOS POSITIVOS E IMPUNIDAD. (2010). Recuperado el: 12 de mayo de 2015 www.libera.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.../BLOB%3AID%3D35.

GARZÓN, Baltasar. (2005). Un mundo sin miedo. Plaza & Janes, S.A. y De bolsillo, Madrid.

HENDERSON, Humberto, (2006). La ejecución extrajudicial o el homicidio en las legislaciones de América Latina, artículo en; Revista Interamericana de Derechos Humanos. Vol. 43. Dir. Electrónica: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/R08060-7.pdf>, tomado el 2 de mayo 2015)

HOUTART, F, Polet, F (1999). La mundialización de las resistencias y de las luchas contra el neoliberalismo. Harmattan. Paris.

HUMAN rigths watch. Informe Mundial de Human Rigths Watch. (2011). Página 229. En línea: <http://www.hrw.org/es/world-report-2011/colombia-0> (Consultado 11 septiembre 2011)

INFORME de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, (2013). A/HRC/22/17/Add.3, 07 de enero de 2013, párrafo 75.

JOINET, M. Louis, (1997). Comisión de Derechos Humanos, ONU, Subcomisión de Discriminación y Protección de las Minorías, 49 sesión, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.12 octubre de 1997. Informe final en aplicación de la decisión 1996/119 de la Subcomisión.

MOVIMIENTO Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE (2005). Verdad, Memoria y Lucha contra la Impunidad, 1966 – 1998, recuperado el

2 de mayo/2015 de:
[http://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/index.php?option=com_content
&view=article&id=93&Itemid=714](http://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=714).

NITOLA Betancourt, Viviana (2011). Las madres ante las ejecuciones extrajudiciales de sus hijos, sus familias y la re significación de sus experiencias. Tesis de investigación presentada como requisito parcial para optar al título de Magister en Trabajo Social con énfasis en familias y redes sociales. Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Trabajo Social, Maestría de Trabajo Social. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá

ONPE. (2005). Observatorio Nacional de Políticas de Evaluación, Una propuesta de la Universidad Pedagógica Nacional, Numero 0. Bogotá: Fondo editorial UPN.

PRESIDENCIA de la República- Ministerio de Defensa Nacional. (2003). Política de Defensa y Seguridad Democrática. Bogotá. Recuperado de: <http://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf>

PROCURADURÍA General de la Nación. (2008). Por falso positivo frente al homicidio en persona protegida, sancionados dos miembros de la fuerza pública, Boletín No. 543-08 de la Procuraduría General de la Nación, 23 de noviembre de 2008. Recuperado de:
http://www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2008/noticias_540.htm

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –



PROCURADURÍA General de la Nación. (2015). Constitución Política de Colombia, recuperado el día 12 de mayo 2015 de: http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm

MELO Rodrigues, Luz Martha, ROJAS Mancipe, Laura, (2011). Entre titulares, imaginarios, falsedades y positivos. Trabajo de grado, Escuela de comunicación social y periodismo, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá.

MEDINA Mateo Rocío, (2013), De madres de Soacha a sujetas políticas: capacidad de agencia ante la impunidad en Colombia reconstrucción de un caso desde una mirada feminista para un litigio estratégico de: Rocío Mateo Medina. Institut Català Internacional per la Pau. Barcelona

MORA Lemus, Giovanni, (2010), Memorias, pluralidad y movimiento social: la experiencia del MOVICE. Trabajo de grado, Maestría de estudios políticos, Facultad de ciencias políticas y relaciones internacionales. Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C.

NEGRI, Antonio (2008) La Fábrica de Porcelana. Editorial PAIDOS.

ROJAS Álvarez, Gloria. (2004). Educación pública: entre la equidad y la competencia. Bogotá. Trabajo de grado Maestría en educación. Universidad Pedagógica Nacional.

SEMANA, (2013). Revista, Proyecto víctimas. Tomado el 15 de Junio de 2013 de <http://www.semana.com/Especiales/proyectovictimas/index.html>

_____ (2010) "¡No tenemos por qué callarnos!" artículo periodístico el 23 de mayo 2015 de <http://www.semana.com/nacion/articulo/no-tenemos-que-callarnos/119304-3>

_____ (2010) "Libres 17 militares involucrados en "falsos positivos" artículo periodístico el 26 de mayo 2015 de <http://www.semana.com/nacion/articulo/libres-17-militares-involucrados-falsos-positivos/111711-3>

SENTENCIA C-620/11, (2011). República de Colombia – Corte Constitucional Aprobación: Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas – Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Pérez. Fecha: 18 – 08 – 2011. Dirección electrónica, Recuperado el 2 mayo 2015 de: <http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-620-11.htm>.)

UNITED NATIONS, UN (2009). Declaración del Profesor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias, misión a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009, p. 2 y 3. Recuperado de <http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/relatoresespeciales/2009/Colombia%20Press%20statement.pdf>

ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR. MAGDALENA MEDIO. (2011).

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –



<http://www.colectivodeabogados.org/Las-mujeres-no-parimos-ni-forjamos>
(Consultado el 11 de octubre de 2011)

RUTA PACÍFICA. MOVIMIENTO SOCIAL FEMENINO. CAUCA. (2011).
<http://base.d-p-h.info/fr/fiches/premierdph/fiche-premierdph-6481.html>.
(Consultado el 11 de octubre de 2011)

VAN BOVEN, Theo. (1978). Director del Departamento de Derechos Humanos de la ONU entre 1977 y 1982.

LISTA DE ANEXOS:

ANEXO 1

CAPITULO DE LIBRO TITULADO:

DE MADRES DE SOACHA A SUJETAS POLÍTICAS: CAPACIDAD DE AGENCIA ANTE LA IMPUNIDAD EN COLOMBIA RECONSTRUCCIÓN DE UN CASO DESDE UNA MIRADA FEMINISTA PARA UN LITIGIO ESTRATÉGICO DE: ROCÍO MATEO MEDINA

Rocío Mateo Medina

LA VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA: UNA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Durante el proceso por la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación que vienen llevando a cabo estas tres mujeres, han padecido un enorme nivel de sufrimiento, angustia e incertidumbre por el desconocimiento del paradero de sus hijos, que ha afectado a su integridad psíquica y moral. Han tenido que soportar la indiferencia y las hostilidades de las autoridades, así como amenazas y hostigamiento en sus vidas cotidianas, entre otros aspectos que recogemos a continuación.

EL SUFRIMIENTO, LA ANGUSTIA, LA INCERTIDUMBRE: NEGLIGENCIA DE LAS AUTORIDADES EN LA RUTA DE BÚSQUEDA DE SUS HIJOS

Comenzamos por el caso de María, cuya búsqueda duró ocho meses. Su hijo Jaime Steven Valencia Sanabria desapareció el 6 de febrero de 2008 y fue asesinado el 8 de febrero; se tuvo conocimiento de su muerte el 26 de septiembre y su cuerpo le fue entregado a María a principios del mes de octubre de 2008. María explicaba:

“Mi niño desaparece el 6 de febrero de 2008 [...]; él salió a las 11.30 del día y dijo que iba traer lo del almuerzo, [...]; y dije ‘tan raro las 6 de la tarde y nada’, Dios mío, se llena uno de impaciencia, las 9 de la noche pero, se me salía y “[...] yo me fui para la Fiscalía a colocar la denuncia; cuando yo llegué allá pues yo estaba vuelta un mar de lágrimas [...] ‘vengo a colocar una denuncia por la desaparición de un menor de edad [...]’; dijo ‘hay no mija, usted porque se preocupa, no sea boba, por allí debe estar con la novia, con los amigos disfrutando [...] váyase para la casa tranquila, venga después y coloca la denuncia, venga dentro de veinte días’.” “[...] ocho meses y yo ya lo había buscado por cielo y tierra, cuando yo me fui para Valledupar [...]; mi otra hija, ella me llama a las 7 de la mañana y me dice ‘mami prenda el televisor que están diciendo que los muchachos desaparecidos de Soacha están muertos en fosas comunes en Ocaña, Norte de Santander’ [...] yo dije ‘Dios mío, mi niño no’, me volví nada, yo salí a ver donde quedaba Fiscalía [...] ‘ay señora los siento mucho pero lo que pasa [es] que no le puedo atender, yo soy el celador yo no puedo hacer nada están en paro’.”

En el caso de Carmenza, el periodo de la búsqueda de su hijo duró 9 días, ya que su hijo fue desaparecido el 23 de agosto de 2008, fue asesinado el 25, se tuvo conocimiento de su muerte el 2 de septiembre y el cuerpo fue entregado el 3 de septiembre de 2008.

Carmenza explicaba:

“Pues mi hijo Víctor Fernando se desapareció el 23 de agosto del 2008 y apareció en Ocaña en 25 de agosto del 2008, y a mí me avisaron (o a mis hijos les avisaron) el 1 de septiembre del 2008. Yo salía del hospital La Samaritana el 2 de

septiembre cuando mi segunda hija me dijo lo que había sucedido con mi hijo Víctor.”

“Pues, en el momento en que se lo fueron a llevar, sí se encontró con mi hijo menor y entonces él le mandó decir de que se iba a trabajar para la costa, que no me preocupara y que él pronto regresaba [...]; pues me preocupé porque él nunca había salido para lejos [...]; yo esa semana, pues le preguntaba a mi hijo Alejandro [...] que si había sabido algo de su hermano o que si había llamado [...].”

“[...] no nos recibía las denuncias ninguna entidad de justicia, porque estaban en paro.”

En el caso de Carmenza, hay que destacar que otro hijo fue asesinado como consecuencia de buscar la verdad sobre la muerte de su hermano. Al respecto Carmenza nos explicó:

“[...] me costó la vida del otro hijo, de John [...], pues sé que está en investigación, pero ya vamos para tres años y a mí no me han llamado [...].”

La búsqueda de Luz Marina duró ocho meses. Su hijo Fair Leonardo Porras Bernal desapareció el 8 de enero de 2008, fue asesinado el 12 de enero, se tuvo conocimiento de su muerte el 16 de septiembre y su cuerpo fue entregado el 24 de septiembre de 2008:

“[...] cuando fueron las 72, fui a la Fiscalía y [en] la Fiscalía nos dijeron que no recibía el denuncia, que porqué había mucha familias que colocaban la denuncia y aparecía el familiar y no la retiraban; entonces que no, que esperábamos otro tiempo y pues como no hallamos respuesta positiva para el denuncia, entonces nosotros empezamos, entre la familia, a hacer una ruta de búsqueda [...].”

“[...] el 6 de febrero, nosotros nuevamente insistimos en la Fiscalía; mi hija Doly y Liz fueron allí [para] que les dieran la oportunidad de que les recibieran el denuncia; allá dijeron ‘pero bueno, ustedes aquí chillando y chillando y su hermano divirtiéndose en Girardot con la novia’ [...].”

“[...] yo lo busqué por el periodo de ocho meses; fueron terribles, ocho meses de búsqueda desesperada; yo fui a todo lado, coloqué denuncios y coloqué la foto de mi hijo en televisión, él salió, pero no hallé nada positivo [...]; me levantaba a las seis de la mañana, me organizaba, salía y, bueno, empezaba a levantar la gente que dormía en los andenes [...].”

Tras ocho meses de una enorme angustia e incertidumbre por el paradero de su hijo, el 8 de septiembre de 2008 llegó la primera pista, para posteriormente saber el 16 de septiembre que el cadáver de su hijo se encontraba enterrado en una fosa común en la ciudad de Ocaña, en el Departamento de Norte de Santander. Así lo narró Luz Marina:

“[...] el 8 de septiembre vino un vecino y me dijo ‘doña Luz Marina le voy a contar algo, mire que el sobrino de mi esposa que desapareció el 28 de enero y duramos ocho meses buscándolo y hace ocho días lo encontraron en Ocaña, Norte de Santander en una fosa común’; le dije ‘¿ cómo así, qué es una fosa común?’, pues yo ignoraba eso [...]; yo le dije ‘yo voy cada 8 días a Medicina Legal, voy y miro las fotos’ [...]; yo salía de ahí satisfecha porque cada ocho días cuando ingresaba a Medicina Legal a mirar y veía que no estaba, ya decía bueno sigo con la oportunidad y el deseo de que mi hijo esté vivo [...].” “[...] hasta el 16 de septiembre. Para mí fue fatal: timbró el teléfono a las 11 de la mañana y contesto mi hija Doly, cuando ella me dijo ‘mami, es la doctora Diana Ramírez de Medicina Legal’; yo sentí dentro de mi cuerpo un susto tan terrible, tan terrible, y sentí un frío en mi vientre que fue terrible, yo cogí el teléfono y caí sentada en el mueble, y le dije a mi hija ‘mami, se acabó la búsqueda de Leonardo’; ya no tuvimos la oportunidad de volverlo a ver, de volverlo abrazar [...].”

Otra de las graves negligencias por parte de los funcionarios del Estado se produjo en la identificación y entrega del cuerpo del hijo de Luz Marina, un hecho sustancial para la elaboración de su duelo, como lo veremos en el apartado destinado a exponer los daños ocasionados. Luz Marina lo relató así:

“[...] al empezar a hacer la exhumación de los muchachos, nos rodearon; ellos me negaron la oportunidad de identificar si era realmente el cadáver de mi hijo o no [...], empezaron a embalsamar el cadáver de mi hijo, lo metieron en el ataúd y ya no pude identificar si el cadáver que me entregaron era de mi hijo; igual de donde yo empezaba a medio ver, yo veía que era un cadáver totalmente descompuesto en osamenta, y yo no podía creer, no podía aceptar que mi hijo si fue muerto en enero, ya en septiembre estuviera en ese estado de descomposición total; esa era mi preocupación, que me hubiesen entregado el cadáver incorrecto [...].”

En este mismo sentido, Andrea Ramírez Orozco se pronunció al respecto del siguiente modo:

“[...] la entrega que se hizo en Ocaña, fue una entrega tal mal hecha por parte de las instituciones del Estado... No les dejaron ver los cuerpos, hubo un cordón militar que nos les permitió entrar casi que ni al cementerio [...]. Yo siento que lo que ha pasado con doña Luz Marina es que precisamente esas dudas se han prolongado en el tiempo por todos estos eventos traumáticos. Primero una

desaparición forzada y, segundo, una entrega donde tú no sabes qué te están entregando; o sea, te entregan una bolsa negra que te la meten en un cuarto, y te la meten en un carro y ‘vaya y entierre eso’ [...].” Aura Melo también nos explicó la omisión de las autoridades en la búsqueda que iniciaron las Madres de Soacha para conocer el paradero de sus hijos:

“[...] [en] la mayoría de las demandas, en las denuncias que se conocían en la Personería, lo que dicen las Madres es que no recibieron mucha colaboración de las autoridades cuando desaparecen los jóvenes [...]; y si no es porque se da toda esta situación de hacer público el tema, muy difícil, porque no recibieron; la mayoría se quejan porque no recibieron ayuda de las autoridades, a algunas escasamente les recibieron la denuncia y ya.”

INCUMPLIMIENTOS DE LAS GARANTÍAS Y LA PROTECCIÓN JUDICIAL POR EL ESTADO COLOMBIANO

Son evidentes los incumplimientos por parte de la administración de justicia del Estado colombiano. De los dieciséis casos que conforman en la actualidad el grupo de las Madres de Soacha, sólo tres casos han sido juzgados. De estos, dos obtuvieron una sentencia condenatoria para cinco militares, dictada el 15 de julio de 2011 (es decir, a los tres años y medio); el tercer caso se saldó con la sentencia más reciente, una sentencia condenatoria para seis militares, con fecha de 25 de mayo de 2012; se trata del caso del hijo de Luz Marina (al cabo de casi cuatro años y medio).

Luz Marina expresa diferentes críticas, así como sus sentimientos y emociones al respecto:

“[...] para mi criterio, pienso que cada cambio de fiscal, es para entorpecer el proceso, para que pierdan el hilo del proceso, entonces empiezan las dilaciones de parte de la defensa militar [...]; solamente acá en Colombia existen noventa días, y tienen que entrar a juicio de preparatoria antes de esos tres meses, pero entonces los abogados empiezan a dilatar los procesos y entonces un abogado empieza a no asistir porque se le pasó el reporte, cinco veces se le murió la mamá, entonces yo veo que eso es entorpecer el proceso [...]; en todas estas dilaciones pasan doscientos catorce días y el 12 de enero de 2010 le dan la libertad a los seis militares;⁷ para mí ese día fue un día terrible, porque ese día

En el caso del hijo de Luz Marina Bernal Parra, tal como ella nos explicó, fueron seis militares los que quedaron en libertad. Sin embargo, es preciso aclarar que,

según el informe de Amnistía Internacional (2010), fueron un total de 31 militares los que quedaron en libertad. En enero de 2010, las personas que hacían campaña por la justicia sufrieron un serio revés cuando unos 31 soldados detenidos fueron liberados por los tribunales por “vencimiento de términos”, ya que la estaba cumpliendo dos años del asesinato de mi hijo y [veía] que los implicados [tenían] libertad.”

Aura Melo considera que la dilación intencionada para que se vencieran los términos constituye una vulneración de los derechos de las Madres de Soacha: “[...] se han presentado muchas situaciones frente al tema de justicia, se dejaron vencer unos términos; o sea, que los soldados hoy están en libertad [...]; hay muchas veces que no avanzan, muchas audiencias que se aplazan, que los abogados puedan usar cualquier tipo de maniobra dentro de su competencia de defensa para dilatar; bueno, una cantidad de cosas que para ellas dejan esa sensación de impunidad porque ya se va a completar cuatro años de la mayoría de los casos y esto no avanza, no se ven resultados, sólo dos casos⁸ de los que hemos conocido en este grupo han tenido ya una condena. Entonces esto también para ellas es una vulneración de sus derechos, por supuesto [...].”

AMENAZAS Y HOSTIGAMIENTO A LO LARGO DE SU VIDA: ABSOLUTA IMPUNIDAD

María y sus hijas han sufrido diferentes amenazas. A este respecto, María manifestó:

“Una mañana, el 7 de marzo de 2009, [...] cuando veo [...] que la moto se viene encima de mí; al mismo tiempo que se viene encima de mí, saca la llanta hacía allá y se baja el parrillero y me toma por el cabello y me pega contra la pared. Pero durísimo, así; ‘usted vieja la queremos calladita, usted habla mucho, está hablando mucho, usted quiere quedar como quedó su hijo, con la jeta llena de moscas’ [...].” audiencia de su juicio oral no se había iniciado en un plazo de 90 días desde su detención tal y como establece la legislación colombiana.

Con posterioridad a la realización de la entrevista, con fecha de 4 de junio de 2012, se conoció el fallo de un tercer caso, por el que se condenó a seis militares a entre 35 y 51 años de prisión por un delito de desaparición forzada, por un delito de homicidio agravado y por un delito de falsedad ideológica en documento público por el caso del Fair Leonardo Porras Bernal, hijo de Luz Marina.

“Las amenazas de Paula... Fue que ella tuvo que llevar la niña al colegio y la niña, como entraba a las 6 de la mañana, la interceptaron y la cogieron de venida para acá [...]; cada uno la cogió por un lado [...]: ‘lo que nosotros queremos es que no hablen, que no digan nada, que dejen las cosas así, dígale a su mamá que se calle’.”

“[...] me llegó una amenaza también; [...] fue un papel por debajo de la puerta [...] yo esa noche había presentado una entrevista; eso fue en enero, el 21 de enero o 22 de enero para España [...]. Eso que tenía letras de revista grande, pequeñas, así, de distintos colores [...] dice ‘vieja llorona, que no están respirando en la nuca’ [sic] [...] yo fui y coloqué la denuncia pero hasta el momento todo se ha echado en costal roto.”

“[...] cuando a mi hija la amenazaron también por teléfono [...], como hace ocho días había tenido el bebé, estaba asustadísima; le dije yo ‘¿qué pasó?’ ‘mami, que me llamaron que nos callemos, que no denunciemos nada, que nos van a matar a todos mami, que nos van a matar a todos, que nos van a matar a todos [...]’.”

En el caso de Carmenza, además de las amenazas y el hostigamiento directo a su persona, hay que destacar que en su caso las amenazas llegaron a su máxima expresión, ya que desgraciadamente se llegaron a materializar, de modo que otro hijo suyo fue asesinado por buscar la verdad y la justicia para su hermano:

“[...] me hicieron varias llamadas al teléfono [...], me dijeron [...] que dejara de dar tanta pantalla porque yo salía bastante en televisión, que dejara de dar tanta pantalla porque iba a aparecer con la jeta de moscas como habían aparecido mis hijos.”

“Mi hijo John fue conmigo a Ocaña, a traer el cuerpo del hermano; él le hizo un juramento al hermano, de que cuando llegáramos acá él iba a investigar cuáles eran las partes donde los reunían y quiénes se los habían llevado. Entonces ahí me lo empezaron a amenazar [...], que atendiera a las consecuencias y, si no, iba a aparecer con la jeta llena de moscas.”

Si bien Luz Marina no ha sido amenazada directamente, sí lo ha sido su hijo mayor. Por ello coincidimos con el análisis de Amnistía Internacional (2010), de acuerdo con el cual estas amenazas contra John Smith pretendían coaccionar a Luz Marina para que pusiera fin a su campaña por la justicia. Al respecto, Luz Marina declaraba: “[...] a partir del 2009 han venido sucediendo una serie de amenazas para ocho familias; [...] [en] el caso de mi hijo mayor John Smith, fue abordado por dos señores en una moto; el parrillero se bajó y empezó amenazarlo; después llegaron mensajes de celular, después mensajes físicos por debajo de la puerta.”

Aura Melo nos explicó la impunidad de las amenazas y la negligencia en la investigación, es decir, la omisión de llevarla a cabo correctamente, de modo que no había desembocado en ningún proceso abierto:

“[...] los casos estaban llamados a archivarse si no se encontraban, pues, mayores pesquisas o mayores cosas en el proceso, y ellos no estaban haciendo el esfuerzo por investigar; la respuesta siempre fue ‘es que no hay información, no sabemos, no podemos decir quién es’; cuando yo salí de la Personería no había avanzado ni la primera imputación de cargos de alguno de estos [...]; entonces no se había hecho nada [...].”

VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA HONRA Y LA DIGNIDAD: LA CRIMINALIZACIÓN DE SUS HIJOS Y EL LEITMOTIV DE SU LUCHA

María explicó lo siguiente:

“[...] cuando llegué a Ocaña, me dice un Fiscal ‘¿que viene por uno de los NN?’;9 le digo ‘sí, vengo por Jaime Steven Valencia Sanabria’, dice ‘ah, los guerrilleros’; me dio mucha rabia cuando me dijo ‘guerrillero’ ¿Cómo que así guerrillero? [...].”

En el caso de Carmenza, sucede algo similar. Ella lo relató del siguiente modo:

Es la denominación que las autoridades legales asignan a los cadáveres sin identificar. “Cuando yo llegué a Ocaña, [...] lo primero que me dijeron [fue] que a quién iba a buscar o qué me podían colaborar; yo dije que iba por el cuerpo de mi hijo Víctor Fernando Gómez; entonces dijo él: ‘fue muerto en combate’; y le dije yo ‘¿cómo que muerto en combate?, mi hijo no era ningún guerrillero, y tengo entendido [...] que él se me desapareció el 23’; y él me dijo que aquí lo trajeron el 25 a las ocho y 45 de la mañana; entonces ¿en qué momento mi hijo se pudo haber infiltrado allá o haber cogido a la gente al margen de la ley?, si no tuvo tiempo, ¿si de Ocaña a Bogotá hay veinte horas? ¿En qué momento él pudo haberse unido con esa gente [...]?”

“[...] en realidad fue un giro de la noche a la mañana, donde dije ‘no, tengo que seguir adelante por mis otros hijos, por mis nietos, y que se haga justicia, y que se sepa la verdad de que mi hijo no era un delincuente, de que mi hijo no era ningún guerrillero, y que limpien el nombre de mi hijo; es lo más importante para mí’.”

Luz Marina tuvo que vivir una situación similar. Así lo explicaba:

“[...] ‘a quién viene a buscar’, yo le dije ‘vengo a buscar a Fair Leonardo Porras Bernal’; ‘ah este es otro narcoterrorista, el jefe de la organización’, [...]; me dolió mucho [...].”

Hay que tener en cuenta, asimismo, las declaraciones públicas ofensivas que realizó el ex presidente del gobierno colombiano Álvaro Uribe Vélez, en relación con los jóvenes:

“[...] el día 27 de septiembre de 2008, cuando nos sentamos a ver las noticias, fue impactante para mí ver a Álvaro Uribe Vélez diciendo en los medios de comunicación que los muchachos de Soacha no se habían ido precisamente a coger café, sino con propósitos delincuenciales; eso para mí fue muy duro [...]; eso me tocó a mí, yo dije ‘se acabó mi silencio, porque mi hijo le quitaron su voz para defenderse, pero estoy yo [...], yo tengo que exigir, yo soy la voz de mi hijo’, entonces rompí el silencio totalmente.”

“[...] somos señaladas por parte del Estado colombiano, por parte de algunos congresistas, por parte de los mismos generales, en los medios de comunicación; dicen que nosotras, las Madres de Soacha, nos encargamos de degradar al ejército colombiano; [...] hay una senadora que dice que las Madres de Soacha no tenían por qué haber denunciado, sacado los casos internacionalmente, que la ropa sucia se lavaba en casa.”

Por último, en lo que respecta a la entrevista realizada a Luz Marina, exponemos un fragmento en que se observa la importancia de la dignidad y la honra de su hijo, la cual constituye un elemento central y común en los tres casos que venimos analizando:

“[...] él era toda mi vida; me la destruyeron, no me queda nada; sólo lo que me queda es luchar porque me limpien el nombre de él, porque él no era ni delincuente, ni extorsionista, ni pícaro, ni nada; pero fue señalado, a eso es a lo que yo le apuesto.”

DAÑOS OCASIONADOS CONTRA SU INTEGRIDAD PSÍQUICA Y MORAL

En el caso de María, cabe destacar las siguientes afectaciones sobre su vida:

“[...] a todo momento me la paso con los ojos rojos [...]; la vista se me deterioró [...]; yo me canso muy ligero [...]; el cabello se me cayó [...]; como que la memoria se me ha perdido un poco [...]; otra cosa, los dientes se me están cayendo una cosa terrible [...]; dolor de cabeza, a veces me da mareo.”

“Me siento muy acabada, me siento agotada [...], yo no soy ni la mitad que era antes [...]; yo trato de que la persona que esté conmigo se sienta muy bien [...], pero por dentro yo estoy vuelta nada [...].”

En el caso de Carmenza, se pueden destacar las siguientes afectaciones a su vida: “Me adelgacé muchísimo [...]; dolor de cabeza, no podía dormir, no me daban ganas de comer, yo quería estar encerrada, donde nadie me hablara [...]; tampoco yo aceptaba un psicólogo [...]; para mí fue terrible, hasta que ya últimamente llegó una niña de FEDES, Ana María Ramírez, y ella pudo como entrar en mí como psicóloga y ella me ayudó.”

A continuación se exponen las afectaciones físicas sufridas por Luz Marina:

“A nivel físico y emocional me ha afectado en toda la extensión de la palabra. Primero la desaparición de mi hijo me produjo una parálisis facial, de tanta búsqueda, de tanta preocupación, donde ver que pasaban y pasaban los días [...] quedé con mucho dolor en la parte de la cara; hay puntos que duelen bastante; el oído tiene un empalme, se soltó, no ha podido ser recuperado; cuando yo muevo la cabeza siento como si hubiera una pepa dentro que se me moviera.”

“[...] no sé si yo pueda llegar a hacer el duelo correcto, porque yo no vi a mi hijo en un ataúd con su rostro, tal cual mis otras compañeras; las otras dieciséis familias vieron a sus hijos completamente. Yo no vi ese rostro metido en un ataúd; por lo tanto, mi concepción, mi pensamiento, es que mi hijo a cualquier momento va a entrar por esa puerta [...]; yo creo y estoy segura de que el duelo no lo voy a poder hacer, no [...]; no sé, hay algo dentro de mí que niega aceptar [...] que mi hijo está muerto. Yo he tratado de convencerme a mí misma de que mi hijo... pues yo no lo voy a volver a ver [...]; pero hay algo muy grande dentro de mí que niega aceptarlo [...].” En este sentido, podemos completar el apartado con la explicación de Andrea Ramírez Orozco (psicóloga forense de Équitas), que manifestaba que: “[...] un duelo muy inconcluso, porque aún cuando ella lo entierra, ella no está segura de estar enterrando a su hijo, [...] es como no poder cerrar esos ciclos que son tan importantes en un duelo [...]. Doña Luz Marina ni siquiera veló a su hijo; o sea, no tuvo un proceso ritual común y corriente, sino que de una vez lo enterró [...].”

QUÉ ENTIENDEN ELLAS POR REPARACIÓN

María respondió lo siguiente:

“A ver, ¿sí tú tienes un espejo, lo rompes [y] tratas de unirlo, te queda igual?”. “Entonces ¿Cuál reparación? Yo no veo reparación alguna; el hecho de que le den a uno una plata por mi niño... ¿acaso mi niño está en venta?” “Yo creo que me

sentiría mejor y hasta bien reparada si hubiera un castigo; que estos asesinos, no los que dispararon, sino los que dieron la orden, de ver a Santos y Uribe en una cárcel; pero lo que se dice una cárcel, no pasando unas vacaciones, sino en una cárcel, a Santos y a Uribe. Eso sería como una bendición de Dios y no sólo por estos casos sino por tantos, tantos atropellos que se han cometido contra el ser humano.”

Carmenza respondió:

“Pues, para mí, es duro decir [...] cómo me sentiría reparada [...]; un hijo no tiene precio y nunca lo tendrá para nosotras las madres.”

“Pues, para mí, lo primero, que pidieran un perdón público a nosotras las víctimas. No solamente a las Madres de Soacha, sino a todas las víctimas de Colombia entera y, lo otro, [...] que se haga una reparación justa y verdadera para nosotras las víctimas.”

“La condena para estos asesinos de nuestro hijos, nuestros jóvenes, y que ojalá les diera cadena perpetua, así sería mejor [...]; tal vez descansaría.”

Luz Marina nos dijo:

“Yo digo, que yo me sentiría reparada en el momento que, primero, que se supiera la verdad, realmente la verdad; segundo, que pagaran aquellas personas, no los seis militares que están allí sentados en el banquillo de los acusados, porque ellos recibieron la orden; hay un alto mando, una cabeza principal, llegar allá. Y que sea limpiado el buen nombre de mi hijo, que eso es lo que más me duele, la forma en que han degradado a mi hijo, porque es que quedó como un extorsionista, como un guerrillero. Como un acosador sexual, como un violador; o sea, degradado [...]; que se paren, pidan perdón, ‘nos equivocamos’.”

“No solamente la reparación es para mí. Él vivía en esta comunidad, donde todo el mundo compartía con él [...]. Yo diría que, más que la parte económica, más en la reparación integral [...], [que en] nombre de la memoria, no solamente de mi hijo, sino del grupo de los muchachos, colocaran una excelente clínica y una excelente universidad, que los jóvenes tuvieran acceso ahí [...] y que digan ‘gracias a la lucha de las madres, nosotros en memoria de los chicos que también tuvieron sueños como nosotros, estamos estudiando [...]’.”

ANEXO 2.

Colombia en busca de justicia: las madres de Soacha. Amnistía Internacional, Enero de 2010. Madrid.

INFORMACION GENERAL

El descubrimiento en 2008 de que las fuerzas de seguridad habían ejecutado extrajudicialmente a decenas de hombres jóvenes de Soacha, una localidad pobre cercana a la capital, Bogotá, obligó al gobierno a reconocer finalmente que las fuerzas de seguridad eran responsables de ejecuciones extrajudiciales y a adoptar medidas para abordar el problema. Los homicidios, cuyas víctimas fueron falsamente presentadas por el ejército como “guerrilleros muertos en combate” (y en ocasiones como “paramilitares muertos en combate”), se llevaron a cabo en connivencia con grupos paramilitares o bandas de delincuentes. Los jóvenes habían sido atraídos al norte del país con promesas de empleo remunerado, pero posteriormente los mataron. En la mayoría de los casos los soldados recibieron dinero, días de permiso y una carta de felicitación de sus superiores, como recompensa por haber “matado a un miembro de la guerrilla”.

La dimensión nacional e internacional del escándalo fue tal que causó la expulsión en octubre de 2008 de 27 oficiales del ejército, entre ellos tres generales, y en noviembre de ese mismo año la dimisión del jefe del ejército, General Mario Montoya, quien había sido relacionado con violaciones de derechos humanos. El presidente Uribe afirmó que los homicidios de los jóvenes de Soacha serían investigados por tribunales civiles y no por el sistema de justicia militar, que a menudo reclama la jurisdicción en casos de esa índole y luego los cierra sin llevar a cabo ninguna investigación seria. En la actualidad la Fiscalía General de la Nación está investigando unas 2.000 ejecuciones extrajudiciales que al parecer fueron cometidas directamente por miembros de las fuerzas de seguridad durante las últimas décadas.

Desde el descubrimiento de las fosas comunes en las que fueron enterrados algunos de los jóvenes de Soacha y las protestas subsiguientes, las madres y otros familiares de las víctimas que han hecho campaña por la justicia han sido amenazados, hostigados y sometidos a vigilancia con el fin de silenciar su campaña.

En 2009, y en buena medida a consecuencia de las protestas públicas que suscitaron los homicidios de los jóvenes de Soacha, decenas de miembros de las fuerzas de seguridad fueron detenidos en relación con estas muertes. Sin

embargo, en enero de 2010, las personas que hacían campaña por la justicia sufrieron un serio revés cuando unos 31 soldados detenidos fueron liberados por los tribunales por “vencimiento de términos”, ya que la audiencia de su juicio oral no se había iniciado en un plazo de 90 días desde su detención, tal y como establece la legislación colombiana. Otros miembros de las fuerzas de seguridad implicados en los homicidios también pueden ser liberados por la misma razón.



Algunas de las madres de Soacha en una conferencia de prensa en 2009. De izquierda a derecha: 1) Edilma Vargas, madre de Julio César Mesa Vargas, 2) Carmenza Gómez Romero, madre de Víctor Fernando Gómez Romero, 3) María Ubilerna Sanabria, madre de Jaime Steven Valencia Sanabria, 4) Luz Marina Bernal Porras, madre de Fair Leonardo Porras Bernal, 5) Idaly Garcera Valdéz, madre de Diego Alberto Tamayo Garcera, 6) Luz Edilia Palacios Bustamante, madre de Jader Andrés Palacios Bustamante 7) Martha Aleyda Alfonso, suegra de Daniel Andrés Pesca Olaya

CASOS:

LUZ MARINA PORRAS BERNAL El hijo de Luz Marina Porras Bernal, Fair Leonardo Porras Bernal, desapareció el 8 de enero de 2008, a los 26 años. El 16 de septiembre del mismo año su madre recibió una llamada telefónica en la que le informaron de que se había encontrado el cadáver de su hijo en una fosa común del municipio de Ocaña, en el departamento noroccidental de Norte de Santander. Según la información que facilitaron fuentes del ejército sobre su muerte, el fallecido era miembro de un grupo armado ilegal y había muerto en combate el 12 de enero de 2008. Investigaciones posteriores realizadas por la Fiscalía General

de la Nación establecieron la falsedad de esta información e indicaron que Fair Leonardo Porras Bernal había sido ejecutado extrajudicialmente por el ejército. Fair Leonardo Porras Bernal, así como decenas de hombres jóvenes de Soacha y de otros municipios de Colombia, dejó su hogar atraído por falsas promesas de trabajo en otra ciudad, cuando en realidad iba a ser ejecutado por miembros del ejército y presentado como un miembro de un grupo armado ilegal muerto en combate. El hermano de Fair Leonardo Porras Bernal, John Smith Porras Bernal, comenzó a recibir amenazas después de que su madre, junto a otras madres de Soacha cuyos hijos habían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, comenzó su campaña por la justicia. El 2 de noviembre de 2009, alguien deslizó una carta por debajo de la puerta del domicilio de John Smith en Soacha. La carta contenía la siguiente amenaza: “Así se esconda y se encierre en ese apartamento usted sale porque sale y hay te vamos a coger porque se le advirtió [...] si no quieres que te pase nada lárguese lo más pronto posible porque le queda muy poco tiempo no lo olvide no estamos jugando porque ya lo tenemos fichado créalo no estamos jugando [...]. Ésta no era la primera amenaza que recibía John Smith. Ya había recibido en su domicilio una amenaza por escrito el 20 de octubre, en la que le decían que “se atuviera a las consecuencias”, en referencia a una carta enviada el 10 de octubre en la que le advertían que tanto él como otras personas de Soacha cuyos familiares habían sido víctimas de ejecución extrajudicial a manos del ejército debían guardar silencio. No lo habían hecho. Temiendo por su seguridad y la de sus familiares, John Smith decidió dejar su casa y a su familia y trasladarse a otro domicilio en Soacha. Se cree que estas amenazas contra John Smith pretendían coaccionar a Luz Marina Porras Bernal, su madre, para que ponga fin a su campaña por la justicia.

CARMENZA GÓMEZ ROMERO El hijo de Carmenza Gómez Romero, Víctor Fernando Gómez, fue víctima de una ejecución extrajudicial cometida por las fuerzas de seguridad el 25 de agosto de 2008. Ella ha recibido amenazas, mientras que otro de sus hijos ha muerto víctima de homicidio y una hija también ha recibido amenazas telefónicas. John Nilson, hijo de Carmenza Gómez Romero y hermano Víctor Fernando Gómez, sobrevivió a un atentado contra su vida ocurrido en el municipio de Fusagasuga, a 60 kilómetros de Bogotá, cuando fue empujado desde un puente de 20 metros de altura. Según los informes, el día del ataque debía mantener un encuentro con alguien relacionado con la investigación sobre el homicidio de su hermano. Según el testimonio de su madre, el 22 de noviembre de 2008 John Nilson recibió la siguiente amenaza en una llamada telefónica: “No sirve la experiencia, no basta con lo de su hermano, deje de investigar”. John Nilson murió después de recibir varios disparos el 4 de febrero de 2009. Tras la muerte de John Nilson otros miembros de la familia siguieron

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –



recibiendo amenazas. El 4 de marzo de 2009, Luz Nidia Torres Gómez, hija de Carmenza, recibió una llamada de teléfono en la que la persona que llamaba la amenazó en los términos siguientes: “Con que ha puesto denuncias que es lo que quiere triple hijueputa, acabar como su hermano [...]”.

MARIA UBILERMA SANABRIA LÓPEZ Jaime Steven Valencia Sanabria, hijo de Ubilerma Sanabria, fue ejecutado extrajudicialmente el 8 de febrero de 2008. María Ubilerma Sanabria recuperó el cadáver y lo enterró en noviembre de 2008. Pocos días después del entierro comenzó a recibir llamadas amenazadoras insultándola y recordándole que debía guardar silencio. El 7 de marzo de 2009, María Ubilerma Sanabria se dirigía a recoger a su nieta del colegio cuando dos hombres montados en una motocicleta la abordaron. El hombre que iba sentado detrás del conductor saltó de la moto y, agarrándola por el cabello, la empujó contra la pared; mientras tanto, el otro le dijo: “[...] nosotros no estamos jugando siga abriendo esa jeta y vera que va a terminar como su hijo, nosotros no jugamos vieja hijueputa [...]” Otros familiares de Maria Ubilerma Sanabria, entre ellos sus hijas, también han recibido amenazas.

BLANCA NUBIA MONROY El 25 de julio de 2009 a las 9:30 de la noche, dos hombres montados en una motocicleta y vestidos con trajes de faena del ejército dieron el alto a la hija de 15 años de Blanca Nubia Monroy y a su hijo de 17. Los registraron violentamente y les preguntaron qué hacían a esas horas en la calle y dónde vivían. Aunque los hijos de Blanca Nubia Monroy se encontraban en compañía de otros adolescentes, sólo los registraron a ellos. Otro hijo de Blanca Nubia Monroy, Julián Oviedo Monroy, fue ejecutado extrajudicialmente el 3 de marzo de 2008.

EDILMA VARGAS RIOJAS El 27 de enero de 2008 Julio César Mesa Vargas, hijo de Edilma Vargas Riojas fue ejecutado extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad. Tras la desaparición de su hijo, ella comenzó a hacer preguntas en el vecindario para averiguar su paradero. Un vecino le dijo que era mejor que dejara de hacer preguntas. Tras estas amenazas, Edilma Vargas Riojas se vio obligada a abandonar su casa en el vecindario de San Nicolás, en Soacha.

FLOR HILDA HERNÁNDEZ El 15 de agosto y el 20 de septiembre de 2009 a Flor Hilda Hernández le robaron el teléfono móvil y una agenda. Ambos contenían datos de personas e instituciones que le habían ayudado en el proceso de denunciar el homicidio de su hijo, Elkin Gustavo Verano, a manos del ejército, el 15 de enero de 2008.

RECOMENDACIONES:

Amnistía Internacional insta al gobierno colombiano a:

- Ordenar investigaciones completas e imparciales sobre las amenazas recibidas por Luz Marina Bernal Porras, Carmenza Gómez Romero, Maria Ubilerma Sanabria

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –



López, Blanca Nubia Monroy, Edilma Vargas Riojas, Flor Hilda Hernández y sus familiares; hacer públicos los resultados y llevar a los responsables ante la justicia;

- *Emprender acciones decisivas para garantizar la seguridad de todas las personas citadas y de sus familiares, de acuerdo con su voluntad.*
- *Ordenar investigaciones completas e imparciales sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales a manos de miembros de las fuerzas de seguridad, hacer públicos los resultados y llevar a los responsables ante la justicia.*

ANEXO 3

EXTRACTO DEL EXPEDIENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMARCA DICE QUE FALSOS POSITIVOS CONSTITUYEN DELITO DE LESA HUMANIDAD - EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES COMETIDAS POR MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA - FALSOS POSITIVOS DE SOACHA – CASO FAIR LEONARDO PORRAS BERNAL

Militares condenados pertenecientes al Ejército de Colombia:

Mayor MARCO WILSON QUIJANO MARIÑO

Teniente DIEGO ALDAIR VARGAS CORTES

Cabo Segundo CARLOS MANUEL GONZÁLEZ ALFONSO

soldado profesional RICHARD RAMIRO CONTRERAS

soldado profesional RICARDO GARCÍA CORZO

soldado profesional CARLOS ANTONIO ZAPATA ROLDAN

Delitos atribuidos:

Desaparición Forzada

Homicidio agravado

Concierto para delinquir agravado

Falsedad en documento público

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA

SALA PENAL

MAGISTRADO PONENTE

AUGUSTO ENRIQUE BRUNAL OLARTE

RADICACIÓN: 54498-60-01-135-2008-80006-05

PROCEDENTE

Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca

ACUSADOS

CARLOS MANUEL GONZALEZ ALFONSO

DIEGO ALDAIR VARGAS CORTES

RICHARD RAMIRO CONTRERAS AGUILAR

CARLOS ANTONIO ZAPATA ROLDAN
MARCO WILSON QUIJANO MARIÑO
RICARDO GARCIA CORZO
DELITOS

***Desaparición Forzada, homicidio agravado, concierto para delinquir
agravado y falsedad en documento público***

MOTIVO Apelación sentencia

DECISIÓN Revoca, modifica pena y confirma en lo demás

Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil trece (2013)

Declaratoria de los delitos investigados como crímenes de lesa humanidad.

Finalmente, compete a la Sala determinar si es viable la petición presentada por la apoderada de víctimas en el sentido de que se declaren los delitos juzgados como crímenes de lesa humanidad, solicitud que fue negada por la a quo al aducir que la competencia para calificar dicha conducta, recaía de manera exclusiva en la Fiscalía conforme lo dispone el artículo 339 de la Ley 906 de 2004.

Inicialmente se precisa que pese a que la juez circunscribió la viabilidad de la declaratoria a un aspecto netamente procesal, lo cierto es que ello no impide que se evalúe si en el presente caso se dan los presupuestos para determinar si estos delitos adquieren o no la categoría de lesa humanidad.

En razón de lo anterior, no resulta cierto que únicamente el fiscal sea el competente para determinar la calidad de un delito como de lesa humanidad, pues conforme el criterio fijado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, tal labor puede ser asumida por el juez de conocimiento, refiriéndolo en los siguientes términos:

“La declaración de crimen de guerra o crimen de lesa humanidad es un acto de connotación judicial(léase de autoridad judicial) **que bien puede hacerlo el funcionario de la Fiscalía General de la Nación que cumple el papel de acusador, o bien el juez del conocimiento en cualquier oportunidad, a instancia del Ministerio Público o por petición de un ciudadano. Dígase además que los delitos de lesa humanidad repudian figuras tales como las leyes de punto final[144], amnistías y autoamnistías, y en general, todo tipo de normas que atenten contra los derechos de las víctimas a tener un recurso efectivo que les permita conocer la verdad”.[145]**

Del anterior precedente se establece que no existe un límite temporal dentro del proceso penal para solicitar y declarar determinado delito como un crimen de lesa humanidad, y que por ende, no es una facultad exclusiva que tiene la Fiscalía como ente de persecución criminal y al que le corresponde acusar, sino que es una actividad que puede ser realizada por el juez de conocimiento, lo cual genera que sí pueda evaluarse la petición que presentara la apoderada de víctimas tanto en primera instancia, como en este estadio procesal.

Por ende, no es dable acoger la fundamentación que expusiera la a quo en el sentido de que sólo corresponde al fiscal conforme lo contenido en el artículo 339 de la Ley 906 de 2004, delimitar la acusación, escenario en el cual debería haberse señalado que los delitos objeto de juzgamiento son o no de lesa humanidad, pues está visto que ello procede en cualquier momento procesal y que puede ser asumido inclusive, por el juez de conocimiento.

Superado así el aspecto procesal, corresponde a la Sala analizar si los delitos de desaparición forzada, homicidio agravado y concierto para delinquir tienen la naturaleza de ser delitos de lesa humanidad.

Para dilucidar tal aspecto, debe precisarse que dentro del Código Penal (Ley 599 de 2000), no se determina el tipo de delitos que son de lesa humanidad, por lo que se debe acudir a lo dispuesto en tratados internacionales sobre el tema, que en tal aspecto por excelencia lo es el Estatuto de Roma[146], que en su artículo 7º contiene aquellos punibles que adquieren la connotación de “lesa humanidad”. Conforme lo anterior, es dable que un punible de los contenidos en el mencionado instrumento internacional, adquiera la calidad de ser un delito de “lesa humanidad” en atención a que tal tratado hace parte del denominado bloque de constitucionalidad, por lo que debe atenderse, a efectos de verificar si un punible tiene la connotación referida, pese a que en la legislación interna, no exista una denominación en específico de tales delitos. En torno a ello, indica la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia:

“Por lo anterior, es plausible que si bien es cierto, en cumplimiento del principio de legalidad se exige que para que una persona pueda ser juzgada por la comisión de un delito, éste, previamente debe encontrarse reglado en una norma en dicho sentido, no lo es menos que la normativa interna debe ajustarse a lo definido en los tratados internacionales y, en ese sentido, armonizarse con los mismos y con la Constitución; razón por la cual es aceptable que se pueda predicar la aplicación del contenido de dichos instrumentos como fuente de derecho, en atención a la mora del legislador en acoplar las leyes a lo allí definido. Por esto, sería posible aplicar el contenido de un tratado internacional reconocido por Colombia respecto de algún delito allí prohibido y sancionado, aún sin existir ley interna previa en dicho sentido, sin atentar contra el principio de legalidad.” [147]

El artículo 7º del Estatuto de Roma consagra:

A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de **un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque**:

- a) Asesinato
- b) Exterminio
- c) Esclavitud
- d) Deportación o traslado forzoso de población
- e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional
- f) Tortura
- g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
- h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de competencia de la Corte;
- i) **Desaparición forzada de personas;**
- j) El crimen de apartheid
- k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

2. A los efectos del párrafo 1:

- i) Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa de admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, o con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado.

En razón de la citada norma, no solamente se debe verificar si el delito investigado se encuentra dentro del listado en mención, sino que además debe evaluarse si

los hechos se dieron de forma **sistemática y generalizada** En torno a ello, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha establecido:

En ese contexto, el crimen de lesa humanidad se distingue de otros crímenes, porque:

a) no puede tratarse de un acto aislado o esporádico de violencia, sino que debe hacer parte de un ataque generalizado, lo que quiere decir que está dirigido contra una multitud de personas;

b) es sistemático, porque se inscribe en un plan criminal cuidadosamente orquestado, que pone en marcha medios tanto públicos como privados, sin que, necesariamente, se trate de la ejecución de una política de Estado;

c) las conductas deben implicar la comisión de actos inhumanos, de acuerdo con la lista que provee el mismo Estatuto;

d) el ataque debe ser dirigido exclusivamente contra la población civil;
y

e) el acto debe tener un móvil discriminatorio, bien que se trate de motivos políticos, ideológicos, religiosos, étnicos o nacionales.**[148]**

Sumado a ello, indicó:

“En ese contexto, el crimen de lesa humanidad se distingue de otros crímenes porque, **a) no puede tratarse de un acto aislado o esporádico de violencia, sino que debe hacer parte de un ataque generalizado, lo que quiere decir que está dirigido contra una multitud de personas, b) es sistemático, porque se inscribe en un plan criminal cuidadosamente orquestado, que pone en marcha tanto medios públicos como privados, sin que, necesariamente se trate de la ejecución de una política de Estado; c) las conductas deben implicar la comisión de actos inhumanos, de acuerdo con la lista que provee el mismo Estatuto; d) el ataque debe ser dirigido exclusivamente en contra de la población civil; y e) el acto debe tener un móvil discriminatorio, bien que se trate de motivos políticos, ideológicos, religiosos, étnicos o nacionales.**”[149]

En reciente jurisprudencia, la misma Corporación en cita precisó que el catálogo de delitos que pueden ser considerados como crímenes contra la humanidad no sólo se restringe al listado contenido en el artículo 7° del Estatuto de Roma, exponiendo en tal sentido lo siguiente:

“En consecuencia, la incorporación de cláusulas internacionales de derechos humanos que giran en torno a la dignidad del ser humano como universo social y concepto ético, permiten una lectura distinta de los principios del derecho penal tradicional y un mayor nivel de protección penal ante graves atentados contra derechos humanos fundamentales, para no dejar de cumplir por defecto el principio de proporcionalidad. En ese sentido, es posible mantener la tipificación de la conducta y la pena vigente al momento de ejecución de la conducta y el desvalor de la misma pero apreciado en el momento de su persecución penal, con lo cual se articula el principio de legalidad penal tradicional y los cometidos de verdad, justicia y reparación, tan en la base del lenguaje del derecho penal internacional.

Desde este punto de vista es posible conferirle a delitos que en el ámbito del derecho penal común se denominan “homicidios” o “lesiones personales”, la categoría de delitos de lesa humanidad, tanto más si para la época de su comisión Colombia ya había suscrito tratados que acentúan la sistematicidad y generalidad del ataque como criterios diferenciadores entre un delito común y conductas que en el nivel de la macro criminalidad afectan de manera superlativa los derechos humanos. Claro, porque según lo ha definido la Sala, un delito de homicidio se cataloga crimen de lesa humanidad, no por la gravedad intrínseca que una conducta de tal naturaleza conlleva o por la importancia individual de la víctima, sino por la sistematicidad de su ejecución que en muchos casos devela una compleja operación criminal, que en este caso tuvo como objetivo el grupo político de la Unión Patriótica.”[150]

Conforme lo anterior, es necesario evaluar si los comportamientos investigados y juzgados se produjeron como un actosistemático y generalizado en contra de la población civil.

*El elemento de la **generalidad** puede predicarse a partir de la multiplicidad de víctimas trasladadas desde el municipio de Soacha hasta el sector de Ocaña en el departamento de Norte de Santander. Lo anterior pese a que en el presente expediente solamente se investiga y juzga la desaparición y muerte de un solo*

individuo que resultó ser el joven Fair Leonardo Porras Bernal, lo cierto es que de las pruebas allegadas al juicio se logró demostrar que por lo menos 11 jóvenes de sectores humildes del citado municipio cundinamarqués, fueron desaparecidos en una época cercana a la fecha en que se reportó la desaparición de Fair, como se prueba a través de los cuadros elaborados por la funcionaria de Medicina Legal Diana Ramírez Páez y la relación de cadáveres reportados como NN e inhumados en el cementerio Las Liscas, presentado por Héctor González Manzano, de la Secretaría de Gobierno de Ocaña.

*De igual forma, el elemento de la **sistematicidad** implica precisamente que los hechos fueron ejecutados como respuesta a todo un plan diseñado previamente, que en este caso consistía en la ubicación, traslado y recepción de jóvenes de sectores humildes para ser ultimados y reportados como muertos en combate y así presentar la unidad militar de Ocaña (Batallón Francisco de Paula Santander) éxitos operacionales, hechos que sucedían como una cadena sistemática de acciones, para llevar a cabo el fin de la empresa criminal.*

***El ataque se produjo de manera exclusiva contra la población civil**, al acreditarse que en este caso tanto Fair Leonado Porras Bernal como los demás jóvenes eran civiles residentes del municipio de Soacha-Cundinamarca, y Ciudad Bolívar (sector correspondiente a la capital de la República), y en este evento, el joven Porras Bernal, no hacía parte de ninguna banda delictiva.*

*Finalmente, se debe evaluar **si el acto tiene un móvil discriminatorio** bien sea político, religioso, étnico, ideológico o nacional.*

Sobre tal aspecto, se precisa que el móvil que llevó a los militares juzgados, a ordenar el traslado de un joven, asesinarlo y presentarlo como muerto en combate, obedeció de manera exclusiva a la finalidad de presentar éxitos operacionales y obtener así felicitaciones y reconocimientos para los miembros de la tropa Pelotón Búfalo 1 del Plan Vial Meteoro N° 3, lo cual se acreditó.

Pese a lo anterior, se evidencia que sí existió un móvil discriminatorio en razón a la condición humilde de los jóvenes de Soacha, marginados y de bajos recursos económicos, situación que conllevaría a que la denuncia no repercutiera de manera inmediata, tal como lo afirmó la señora Luz Marina Bernal, madre de Fair Leonardo[151], (quien acudió en 3 ocasiones a la Fiscalía de Soacha, sin resultados favorables, los cuales sólo se dieron cuando se logró la identificación del cadáver del joven y los hechos fueron denunciados públicamente por el

Personero de Soacha-Cundinamarca,) la reacción de los medios de comunicación y las autoridades judiciales, lo cual llevó a los militares implicados en el asunto a activar todo el plan criminal diseñado para desaparecer al joven y presentarlo como “baja en combate”, con la firme convicción de que en razón de su extracción humilde, los hechos pasarían inadvertidos, al igual que sucedió con los demás jóvenes que fueron captados por los reclutadores ubicados en Soacha y llevados hasta el sector de Ocaña en Norte de Santander, pues todos ellos correspondían a unas características similares que debían ostentar para ser seleccionados y llevados hasta dicha ciudad, dado que todos provenían de sectores vulnerables de la población y con perfiles de jóvenes con escasas oportunidades, condiciones que evidencian un ánimo discriminatorio por parte de los encausados.

En virtud de ello, se colige sin dubitación que convergen los presupuestos señalados en las normas internacionales y en la jurisprudencia nacional para que sea dable declarar los delitos investigados en el caso de la referencia como de lesa humanidad, haciendo la salvedad que conforme lo dispone el mismo Estatuto de Roma, la única consecuencia jurídica de dicha declaratoria, es la imprescriptibilidad de la acción penal de los punibles aquí investigados.

Por ende, al cumplirse a cabalidad todos los requisitos para que los hechos objeto de juzgamiento puedan ser declarados como delitos de lesa humanidad, se accede a la petición presentada por la apoderada de víctimas.

Redosificación punitiva:

Dado que en el presente caso se estableció que los militares enjuiciados son responsables de la totalidad de los delitos acusados por la Fiscalía, es preciso fijar el nuevo quantum punitivo. En razón de lo anterior, la Sala avala la dosificación que efectuó la juez de conocimiento al encontrar que la misma se ajusta a los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Por ende, se tomará la dosificación efectuada y sobre ella, se realizará el correspondiente incremento punitivo por los delitos de desaparición forzada agravada y concierto para delinquir.

Mayor Marco Wilson Quijano Mariño.

En la sentencia de primera instancia el mencionado procesado resultó condenado por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada agravada, imponiéndole la juez una pena de 612 meses equivalentes a 51 años de prisión, por los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio agravado, pena que resulta adecuada.

Como quiera que en el presente fallo se encontró responsable al Mayor Marco Wilson Quijano Mariño del delito de concierto para delinquir agravado, es necesario realizar un incremento en la pena a cumplir. Para ello, se tomará el monto ya fijado por la juez de instancia de 612 meses de prisión, y atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 31 del Código Penal, por tratarse de un concurso de delitos, tal pena se aumentará en 24 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, para un total de 636 meses de prisión, equivalentes a 53 años de prisión, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 300 meses, y multa de 3.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, criterios adoptados por la juez de instancia.

Teniente Diego Aldair Vargas Cortés.

El militar fue condenado en primera instancia a la pena de 52 años de prisión como coautor de los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada agravada y autor del punible de falsedad ideológica en documento público. Empero, dado que en el fallo de instancia se encontró responsable también al teniente del punible de concierto para delinquir agravado, debe efectuarse igualmente una redosificación de la pena, en atención a lo establecido en el artículo 31 del Código Penal.

Para ello, se tomará el monto ya fijado por la juez de instancia de 624 meses de prisión, y atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 31 del Código Penal, por tratarse de un concurso de delitos, tal pena se aumentará en 24 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, para un total de 648 meses de prisión, equivalentes a 54 años de prisión, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 300 meses, y multa de 3.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, criterios adoptados por la juez de instancia.

Cabo segundo Carlos Manuel González Alfonso y soldados profesionales Ricardo García Corzo, Richard Contreras Aguilar y Carlos Antonio Zapata Roldán.

Los referidos militares fueron condenados en primera instancia únicamente por el delito de homicidio agravado. En este fallo, se encontraron responsables así mismo del delito de desaparición forzada agravada y concierto para delinquir agravado, situación que genera que debe ajustarse la pena a cumplir, en atención a lo establecido en el artículo 31 del Código Penal.

En virtud de ello, y atendiendo a la norma fijada, debe tomarse la pena más grave y a ella, efectuarle el incremento por los demás delitos. Para ello, se respetará el criterio adoptado por la a quo, quien fijó la pena más grave por el delito de desaparición forzada agravada en un monto de 510 meses de prisión, a la cual se aumentarán 102 meses por el delito de homicidio agravado, y 24 meses por el delito de concierto para delinquir agravado, para una penal total a cumplir de 636 meses de prisión, equivalentes a 53 años de prisión, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 300 meses, y multa de 3.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, criterios adoptados por la juez de instancia.

Como quiera que dicho monto supera de manera amplia el límite punitivo de los artículos 38 y 63 del Código Penal, y no cumplirse con el requisito objetivo lo cual releva a la Sala de efectuar un análisis del aspecto subjetivo, no es dable conceder a los procesados los subrogados penales de la prisión domiciliaria ni la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión, por lo que deberán cumplir su condena en el centro carcelario que el INPEC asigne para ello.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO. REVOCAR, el numeral séptimo del fallo condenatorio proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, el 25 de mayo de 2012, y en su lugar, CONDENAR a los procesados Marco Wilson Quijano Mariño y Diego Aldair Vargas Cortés por el delito de concierto para delinquir

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –



agravado. La pena a cumplir por el Mayor Marco Wilson Quijano Mariño es la de 636 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el lapso de 300 meses y multa de 3.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El teniente Diego Aldair Vargas Cortés deberá cumplir una pena de 648 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el lapso de 300 meses y multa de 3.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El INPEC asignará el centro carcelario en el cual deban cumplir la pena.

SEGUNDO: REVOCAR, el numeral octavo, y en su lugar, **CONDENAR**, a los señores Carlos Manuel González Alfonso, Ricardo García Corzo, Carlos Antonio Zapata Roldán y Richard Ramiro Contreras Aguilar, como coautores del delito de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada agravada, a la pena de 636 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el lapso de 300 meses y multa de 3.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El INPEC asignará el centro carcelario en el cual deban cumplir la pena.

TERCERO: DECLARAR que los delitos investigados en el caso de la referencia, son de lesa humanidad, conforme lo analizado en la parte motiva de este fallo.

CUARTO: CONFIRMAR, en los demás aspectos el fallo objeto de impugnación.

QUINTO: *Contra esta decisión procede el recurso extraordinario de Casación*

SEXTO. *Se designa para la lectura del fallo al Magistrado Ponente, atendiendo a lo previsto en el art. 164 de la Ley 906 de 2004*

QUEDA NOTIFICADA EN ESTRADOS, CÚMPLASE.

AUGUSTO ENRIQUE BRUNAL OLARTE

Magistrado

JOSELYN GÓMEZ GRANADOS

Magistrado

ISRAEL GUERRERO HERNÁNDEZ

Magistrado

CLARA GUTIÉRREZ SOTO

Secretaria

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –

